



# Resumen de Prensa

viernes, 25 de febrero de 2022

# El comercio se rebela contra la ampliación de la zona de bajas emisiones y augura cierres

Fecosva y Avadeco temen que las restricciones a partir de 2023 reduzcan mucho la afluencia de clientes

F. MARTÍN VALLADOLID

La zona de bajas emisiones que el Ayuntamiento pretende implantar a partir del segundo semestre de 2023, y que impedirá el acceso de los vehículos que no tengan la etiqueta ambiental a un área de 3,1 kilómetros en torno al centro de la ciudad, no gusta nada a los comerciantes.

La Federación de Comercio y Servicios de Valladolid, Fecosva, advierte de que la «imposición» de la zona de exclusión para los vehículos más contaminantes en una superficie que duplica la prevista en un principio será «la puntilla para muchos establecimientos» al «impedir a muchos clientes el acceso a la ciudad, con el efecto más perjudicial que es el disuasorio». Fecosva lamenta que «no se tenga en cuenta el grave perjuicio económico que se causa a toda la actividad económica de la ciudad, especialmente al comercio» y augura que, de mantenerse la zona de bajas emisiones en los términos previstos, acarreará cierres en establecimientos.

La puesta en marcha de una zona de bajas emisiones con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes es una obligación legal para los municipios con más de 50.000 habitantes, una medida que Fecosva asume, pero desde la organización señalan que «puede hacerse de muchas formas y plazos». La Federación de Comercio pone como ejemplo Sevilla, donde asegura que la zona de bajas emisiones «no es permanente» y se activa cuando se dan episodios de alta contaminación.

Los comerciantes añaden que la ampliación de la zona hasta el doble de lo previsto supone un exceso restrictivo más propio «de ciudades mucho más grandes».

En su crítica frontal al plan y los plazos previstos por el Ayuntamiento, Fecosva recuerdan también que «no resulta fácil acceder a un vehículo con bajas emisiones o eléctrico» porque la tecnología tiene unos tiempos y advierten también de que saltarse plazos para adaptarse a las nuevas exigencias «tiene consecuencias terribles para el empleo y la economía».

Por último, señalan que la implantación de la medida debe ir acompañada de la apertura de «aparcamientos en zonas próximas al área restringida para evitar que miles de vehículos circulen cada día en busca de un sitio donde aparcar contaminando más».

También desde la Asociación Vallisoletana de Comercio, Avadeco, su presidente, Alejandro García Pellitero, coincide con Fecosva

en que la zona de bajas emisiones tendrá «un efecto disuasorio para que la gente no se acerque al centro» y considera que ampliar el área de exclusión «es demasiado ambicioso para una ciudad como Valladolid». Pellitero da por descontado que cuando se implante la zona de bajas emisiones habrá «menos afluencia de gente al centro», lo que se traducirá en menos clientes.

Al presentar la zona de bajas emisiones, la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, explicó que la medida supondrá una reducción de los gases contaminantes de efecto invernadero de entre el 26% y el 78% en el área delimitada, en función del nivel de restricción. Para el conjunto de la ciudad se estima que la reducción oscilará entre el 2% y el 5%, so-

bre todo en óxido de nitrógeno y en partículas en suspensión. Por la zona de exclusión estará prohibida la circulación de los vehículos sin etiqueta ambiental, incluidos aquí los de gasolina con normativa Euro 3 o anterior (anteriores a 2005) y los diésel de normativa Euro 4 o anterior (anteriores a septiembre de 2009). Sólo podrán circular los 'cero emisiones', los 'eco', los categoría ambiental B y los categoría C.

El acceso se restringirá de forma progresiva, de tal manera que en enero de 2025 no podrán entrar los B, y en enero de 2030 tampoco podrán circular por la zona de exclusión los C. Sólo podrán hacerlo los vehículos 'eco' y 'cero emisiones'.

Para controlar que se respeta la zona, 41 cámaras vigilarán un área comprendida entre las calles Puente Mayor, Juana de Castilla,

Arzobispo José Delicado, Paseo del Hospital Militar, Paseo del Arco de Ladrillo (bis) y Paseo del Arco Ladrillo, Santa Fe, Paseo Farnesio, Avenida de Segovia, Túnel de Labradores, Calle de la Vía, Calle Unión, Nicasio Pérez, Plaza de San Juan, Huelgas, Real de Burgos, Chancillería, Gondomar, Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, Plaza de San Nicolás y Puente Mayor.

La implantación de la zona de bajas emisiones es el eje sobre el que gira el Plan de Mejora de la Calidad del Aire, que se aprobará en el pleno del próximo día 3 y que promete un duro debate entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición. Vox ya ha anunciado que presentará una moción, mientras el PP llevará otra en la que plantea una ordenanza de movilidad para toda la ciudad.

## MARÍA SÁNCHEZ RECUERDA QUE LOS COMERCIANTES NO ALEGARON

La concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, dijo ayer que ninguna de las asociaciones de comerciantes presentó alegaciones al Plan de Calidad del Aire pese a abrirse un plazo de dos meses, «el doble de lo establecido» para este trámite. Sánchez añadió que «gracias al aumento del área (de restricción para vehículos) son más los residentes que pueden transitarla» y contribuirá a mejorar «la fluidez del tráfico al limitar los coches que acceden y el tráfico de paso». Tras señalar que un vehículo sin etiqueta contamina un 90% más que los que si tienen este distintivo, se mostró convencida de que «una pequeña reduc-

ción de vehículos va a llevar aparejada una gran mejora en la calidad del aire». La concejala, que tiene previsto reunirse con los representantes del comercio el próximo día 7, dijo que van a «seguir dialogando con todo el mundo», aunque parece claro que la ampliación de la zona de bajas emisiones es una medida sin retorno. Sánchez destacó las excepciones que se aplicarán, de manera que las restricciones no afectarán a los residentes, a los profesionales que se dedican al reparto y a los vehículos de emergencia. Las excepciones se recogerán en una ordenanza, que ahora está en el período de recepción de alegaciones, y en la que está previsto incluir también la posibilidad de que todos los vehículos puedan aparcar en los estacionamientos públicos que están dentro del área de restricción, con independencia de si tienen o no etiqueta ambiental.

## Fecosva prevé «graves perjuicios» por la ampliación de la zona de bajas emisiones

### EL NORTE

VALLADOLID. El Ayuntamiento de Valladolid presentó la semana pasada el proyecto de la futura zona de bajas emisiones, que finalmente ocupará el doble de la superficie que estaba prevista hace ocho meses, y donde se prohibirá la circulación de los coches más contaminantes a partir del segundo semestre del año que viene. Ante esta ampliación de la superficie limitada, la Federación

de Comercio y Servicios de Valladolid (Fecosva) ha emitido un comunicado en el que se queja de que esta decisión causará «graves perjuicios económicos para el comercio y los servicios en un momento que empezamos a salir de una pandemia que ha dejado al sector en una profunda crisis. Estas medidas van a ser la puntilla para muchos establecimientos, pues van a impedir a muchos de nuestros clientes el acceso a la ciudad», aseguran.

## VALLADOLID

# La Junta constituye una oficina para gestionar los 12.800 M€ de fondos UE

Carriedo se congratula de que el Gobierno devuelva los 195 millones del IVA antes del 31 de marzo

R. G. VALLADOLID

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León afrontará una reorganización para incluir una oficina que se encargue de gestionar los 12.800 millones de euros que está previsto que reciba Castilla y León de los fondos europeos. Así lo señaló este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del ejecutivo autonómico y consejero del ramo, Carlos Fernández Carriedo.

En concreto, lo que afrontará la Consejería será la modificación y refuerzo de la estructura de la Dirección General de Presupuestos y Estadística para mejorar la adecuada capacidad administrativa que se exige por la normativa comunitaria en el ámbito de la gestión de Fondos Europeos.

De esta manera se desarrollará un sistema de gestión para reforzar y asegurar la ejecución de los Fondos Europeos, que suponen una doble oportunidad para el futuro de Castilla y León, ya que ayudarán a impulsar la transformación económica de la Comunidad y a superar los efectos de la crisis provocada por la pandemia sanitaria.

En este sentido, el objetivo financiero de Castilla y León es el de recibir un total de 12.800 millones de euros procedentes de fondos europeos, tanto por la vía de los Next Generation EU, como por el Marco Financiero Ordinario. Así, el Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU -del que Castilla y León aspira a recibir, al menos, 5.000

millones de euros- impulsará la transformación digital, el desarrollo sostenible y reto verde, objetivos que coinciden con la estrategia de modernización que está llevando a cabo la Junta, y que incluye la cohesión económica, social y territorial de la Comunidad, avanzando en el desarrollo rural y el reto demográfico.

La Junta de Castilla y León, para acometer las reformas que permitan la recuperación y reactivación económica y superar los efectos de la crisis, está abordando la gestión de los fondos desde la coordinación y la participación. Para ello ha creado la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea con el objetivo de optimizar la coordinación en la gestión de los fondos europeos, a lo que se suma la elaboración del documento de 'Iniciativas de recuperación y resiliencia en Castilla y León' y la constitución de tres mesas sectoriales -empresarial, científico-tecnológica y de coordinación con las corporaciones locales- para establecer un foro estable de información y participación respecto a los principales hitos y objetivos estratégicos en aplicación de los fondos europeos EU.

Para potenciar la ejecución de los Fondos Europeos se creará un nuevo servicio, que estará dotado con un jefe de servicio, 8 técnicos y 2 puestos de personal laboral.

Por otra parte, y también durante la rueda de prensa de ayer, el portavoz de la Junta trasladó que el gobierno castellano y leonés se congratula del «gran éxito» para la

## OTROS ACUERDOS DEL CONSEJO

**Castronuño.** La localidad vallisoletana de Castronuño recibirá 2,5 millones de euros para modernizar 392 hectáreas de regadío de 236 propietarios.

**Vacunas.** La Junta asume una inversión de casi 2 millones para contratar un suministro de vacunas contra la hepatitis B, la difteria, el tétanos o la tosferina acelular, entre otras enfermedades.

**Escolarización.** Aprobadas subvenciones por importe 1,7 millones para financiar los gastos generados por la escolarización de alumnos de 5º y 6º de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2021-2022 en los seminarios menores y diocesanos de la región, conforme al acuerdo firmado entre el Estado español y la Santa Sede.

marzo de este año, lo que valora como «una cantidad relevante».

Carriedo destacó este compromiso del Gobierno debido a que la Junta «no se rindió» y «peleó» su pago primero «con mano tendida» y después ante el Tribunal Supremo que la dio la razón.

Precisamente, la Junta de Castilla y León aceptó la cantidad comunicada por el Gobierno de 195 millones de euros, once de ellos correspondientes a intereses, que ahora se abonará antes del 31 de marzo.

La Junta ya consignó la cuantía de 182 millones de euros en concepto de IVA más 10 millones de intereses en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022, en total 192 millones de euros, si bien no se aprobó por el adelantó electoral.

En este mes de enero de 2022, el Gobierno de España comunicó a la Junta que, a efectos de cumplir la sentencia, ha calculado un total de 194,86 millones de euros, de los cuales 183,06 millones corresponden al IVA pendiente y 11,8 millones de euros se refieren a los intereses devengados, calculados desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022.

La cantidad que recibirá Castilla y León supone el sexto importe más alto de los que ingresará el Gobierno de España a las comunidades autónomas. Las mayores beneficiadas son Andalucía y Cataluña, que superan los 500 millones, mientras que Madrid ocupa el tercer puesto con casi 425.

Comunidad, que se extiende al resto de territorios, del pago de 194,8 millones del IVA pendiente de la liquidación de 2017 antes del 31 de

# Iberaval alcanza 6.061 operaciones y 456 M€ en apoyo empresarial en 2021

Pontvianne destaca este récord y vaticina otro en 2022 por el alza de tipos y el final de los ERTE

**VALLADOLID**  
La Sociedad de Garantía Reciproca Iberaval no para de crecer y respaldó en 2021 un total de 6.061 operaciones de financiación por más de 456 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 17% respecto al año precedente, y un «nuevo récord histórico» de apoyo al tejido empresarial.

El presidente de Iberaval, César Pontvianne, remarcó que ya llevan siete años creciendo a «doble dígito» y vaticinó que en este ejercicio volverán a hacerlo para alcanzar un nuevo techo en operaciones y financiación.

Pontvianne constató que Iberaval «ha estado, está y estará» al lado de las empresas en un «momento crucial» que estará marcado por la subida de tipos y el final de los ERTE y de la carencia de los préstamos ICO, junto a una situación «más compleja» en la Comunidad por la falta de un presupuesto y con un gobierno interino, a lo que hoy se suma la crisis geopolítica por la invasión rusa de Ucrania.

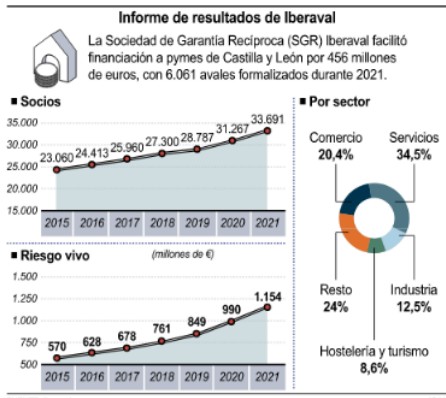
El directivo también puso de relieve la «incertidumbre» reinante ante la oleada de incrementos de las materias primas que repercutirán en los costes de producción. Pese a todo, comentó que el nivel de morosidad permaneció estable en el 4,1%.

Con todo, ensalzó que «las empresas y empresarios han vuelto a demostrar su fuerza en muchos casos renovándose de los pies a la cabeza» en un contexto de IPC galopante, del 6,5%, con una crisis de componentes y una dependencia de mercados que generan incertidumbre. Al respecto, defendió su apuesta por la digitalización y automatización, la sostenibilidad y la economía colaborativa.

César Pontvianne repasó los logros de Iberaval el año pasado y concretó que había duplicado la financiación a empresas respecto a cinco años atrás. Asimismo, el riesgo vivo alcanzó los 1.154 millones de euros, en más de 20.000 préstamos, y duplicó el importe respecto a 2015. Un riesgo vivo, dijo, que contribuye a sostener 190.408 puestos de trabajo, el 96% indefinidos.

El responsable económico se felicitó porque el 15% de las firmas respaldadas correspondieron a nuevos empresarios, lo que refleja que «existe un gran espíritu emprendedor» en Castilla y León. El presidente de la SGR también se congratuló porque una de cada cuatro operaciones, el 25%, fueron para inversión.

Pontvianne indicó que el 72% de las operaciones se suscribieron con micropymes y un 22% con pymes; con preponderancia del sector ser-



FUENTE: Iberaval

ICAL



César Pontvianne, E. M.

vicios, 34%, seguido por el comercio, 20%; la hostelería y el turismo, 15%, y la industria, 12%. La operación media suscrita fue de 105.000 euros, según aclaró, con un plazo de devolución medio de caso cinco años.

El alto ejecutivo remarcó, por último, que Iberaval es la SGR «con más actividad» de las 18 que operan en España y formalizó el 23% del importe facilitado por todo el sistema. Asimismo, precisó que los socios partícipes en la SGR alcanzaron a finales del año los 33.691, con un aumento del 7% respecto al año anterior, con 132 protectores. Por otro lado, el alto ejecutivo

puso de relieve también que la «incertidumbre» por el gobierno interino en la Comunidad y la falta de presupuestos, sumados a la crisis geopolítica mundial, «retrasará las decisiones» empresariales sobre inversiones.

«La incertidumbre siempre es negativa para las empresas», dijo, para expresar que les preocupa un retraso en la constitución del nuevo gobierno de Castilla y León, porque un ejecutivo interino «no toma decisiones» impredecibles para el tejido productivo.

Asimismo, reclamó a los próximos responsables de la Comunidad, que mantengan su apoyo a la financiación que presta la sociedad de garantía recíproca a las empresas de la Comunidad, para seguir creciendo, informa Ical.

La sociedad de garantía trabaja de manera intensa la mejora de condiciones de acceso al crédito, a partir de la consecución de productos bonificados como los incluidos en ICE Financia, que, a lo largo de 2022, prevé inducir inversiones por 128 millones de euros y que, históricamente, ya ha facilitado más de 13.000 operaciones por 1.373 millones de euros, 3.500 de las cuales han tenido lugar durante estos dos años de pandemia. Junto al ICE, Iberaval también gestiona dos Instrumentos Financieros de garantía, referidos a crecimiento empresarial e I+D y empresas innovadoras, cofinanciados con fondos FEDER y correspondientes al programa Operativo 2014-2020 de Castilla y León.

## Ucrania compró productos de Castilla y León por 30 millones el año pasado

Empresas de la región venden al país invadido por Rusia vermut, queso, café, galletas y mermeladas, entre otros artículos

ÁNGEL BLANCO / AGENCIAS

VALLADOLID. No es que Ucrania sea un socio comercial importante para las empresas de Castilla y León, pero el interés de su población por los productos de la comunidad sigue una tendencia creciente que se recuperó el año pasado tras el bache de los ejercicios previos. Los coches y furgones de Renault e Iveco son, como en casi todos los casos, los productos más exportados al país que sufre las iras de Putin. Pero la lista de bienes que se producen en la región y son consumidos por la población ucraniana es extensa y abarca desde café y galletas hasta champú y depuradoras de agua.

Las exportaciones castellanas y leonesas a Ucrania ascendieron el año pasado a 30 millones de euros, un salto importante desde los 22 millones en que se habían estancado durante 2019 y 2020. El récord de ventas en esta república de Europa Oriental permanece en 2018, con más de 32 millones. La progresión, sin embargo, es notable si tenemos en cuenta que el 2012 apenas se exportaban 4,5 millones de euros.

El Banco Mundial clasifica a Ucrania como un estado de medianos ingresos, cuyos principales problemas son las malas infraestructuras, unos medios de transporte subdesarrollados, la corrupción y la burocracia. Los

ucranianos gastan alrededor del 45% de sus salarios en alimentación y ropa, según el organismo estadístico estatal. Ucrania era la segunda república más importante de la Unión Soviética en términos económicos gracias a su fértil suelo, que hace del país el quinto mayor productor mundial de maíz, el octavo productor mundial de trigo, el tercero de patata y el número uno en girasol. Son estos algunos de los productos ucranianos que llegan a la comunidad, que el año pasado importó por valor de 7,7 millones.

Un tercio de las ventas de la comunidad en Ucrania son automóviles y vehículos industriales (9,2 millones), mientras que el

segundo lugar lo ocupan las galletas palentinas, con 1,8 millones, con los aparatos de riesgo para la agricultura (1,5 millones) completando el podio. Son también relevantes, con 1,4 millones, las ventas de preparados capilares, lacas y demás, procedentes de Burgos.

En volúmenes más modestos figuran todo tipo de productos, entre los que sobresalen los agroalimentarios. Con más de 900.000 euros aparecen los medicamentos y diversas clases de maquinaria; y con más de 500.000, concentrado de café y jugo de uva. De 200.000 euros para arriba encontramos desde neumáticos a carne de cerdo, de-

puradoras de agua o alimentos para animales. Con cantidades tendentes a lo anecdótico figuran vino con Denominación de Origen, quesos, mermeladas, vermut y hasta delantales, batas y otras prendas de trabajo.

Ucrania ocupa el puesto 45 entre los destinos comerciales de los productos castellanos y leoneses, con una cuota de apenas el 0,2% del total. El año pasado vendieron allí sus mercancías, según la información facilitada por el ICEX, exactamente 100 empresas de la comunidad, frente a las 107 de 2020 o las 61 de 2016. Exportan de manera regular, es decir, durante los últimos cuatro años seguidos, una treintena.

Por otra parte, El presidente de Iberaval, César Pontvianne, advirtió ayer de que las incertidumbres, tanto las de carácter político como las de asuntos económicos y geopolíticos, llevan a retrasar inversiones en uno o más años respecto a lo previsto. «Siempre es negativo», ha constatado Pontvianne, con una referencia expresa a los efectos del ataque de Rusia a Ucrania que supone un «elemento de inestabilidad» en el mundo ante el conflicto que vive el país de la Europa del Este, que, según ha recordado, es un gran productor de cereales lo que puede afectar al sector primario y a la agroindustria.

Pontvianne abogó por mantenerse «vigilante» y evidenció la importante caída de la bolsa experimentada ayer. «Nunca es bueno y el dinero, como se suele decir, es cobarde», añadió en su reflexión. También recordó que finalizarán los ERTE y las carencias de los préstamos ICO y ha pronosticado que el PIB alcanzará niveles prepandemia, si bien ha aclarado que la situación de Castilla y León es «más compleja» como consecuencia de la prórroga de las cuentas de 2021 cuando el escenario de 2022 es diferente.



Un hombre come en un restaurante de la ciudad ucraniana de Lubny, en el este del país. CARLOS BARRIA/REUTERS

# La invasión rusa pone en riesgo 217 M€ de comercio exterior

Los sectores, con la automoción a la cabeza, preocupados ante posibles sanciones comerciales

**RICARDO GARCÍA VALLADOLID**

Las tensiones surgidas en las últimas semanas entre Rusia y Ucrania desembocaron en una invasión y en un conflicto armado. Las consecuencias más terribles son las pérdidas de vidas humanas, pero hay unas pérdidas económicas inevitables que azotarán de tal forma a Europa que incluso las regiones por debajo de los países se verán afectadas. Es el caso de Castilla y León, que desde que el ejército ruso entrara en suelo ucraniano ve con «preocupación» como 217 millones de euros en comercio exterior están en riesgo.

Así lo alertó el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien señaló ayer que son muchos los sectores que mantienen acuerdos comerciales con Rusia y Ucrania y que ahora temen el bloqueo de sus productos. En concreto, esos cerca de 220 millones son la suma de las importaciones y exportaciones que Castilla y León realizó con estos dos países a lo largo de 2021.

El destino que recibió más productos de la Comunidad durante el año pasado fue Rusia, donde alcan-

zaron los 163 millones de euros. Por el contrario, desde allí se importaron cerca de 17 millones de euros, lo que a su vez se traduce en que el balance comercial con este territorio es muy positivo.

En el caso de Ucrania, ambas cantidades son menores, con 30 millones en exportaciones y 7 en importaciones, pero con un balance igualmente positivo para las empresas castellanas y leonesas que ven como una tendencia de importes crecientes puede verse truncada por el conflicto armado.

Tras los últimos acontecimientos en Europa del Este, y según explicó Carriedo, la atención de las empresas se centra en las posibles sanciones económicas que la Unión Europea imponga, especialmente a Rusia por ser quien ha invadido territorio ucraniano.

No obstante, señaló también que las restricciones comerciales no tienen por qué afectar obligatoriamente a todos estos sectores, si bien reconoció que aquellos que mueven cantidades mayores son los que miran el conflicto con mayor preocupación.

## El gas sube hasta un 60% en un solo día por Ucrania y contagia al precio de la luz y de los combustibles

El conflicto bélico se traslada a la factura eléctrica y al petróleo, que supera ya los 100 dólares, en plena escalada de la inflación

JOSÉ M. CAMARERO

MADRID. La guerra energética que subyace de la intervención militar de Rusia en Ucrania ya tiene sus primeros efectos prácticos: el precio de las materias primas vinculadas a la energía se ha disparado desde primera hora de la mañana, fundamentalmente en el caso del gas, uno de los focos que también explican este conflicto. Su cotización repuntó finalmente un 40% hasta los 125 euros/MWh. Pero en algún momento de la jornada subió un 60% hasta los 140 euros/MWh.

El precio del gas ya venía mostrando síntomas de explotar a medida que crecía la tensión entre Rusia y Ucrania. De hecho, su cotización se encontraba en el entorno de los 70 euros/MWh a principios de esta semana. Aún no ha alcanzado el récord de 160 euros/MWh previo a la Navidad, pero si la guerra persiste los futuros anticipan que los precios se mantendrán por encima de los 100 euros a medio plazo.

Este alza tiene una repercusión directa en otro bien clave, el precio de la luz. En el caso de España, la producción de los ciclos combinados —las centrales que usan gas para generar electricidad— representa en lo que va de año casi un 25% de toda la demanda de España. Incluso por encima de lo que producen las nucleares o las eólicas, según los úl-



Un cliente reposta combustible en una estación de servicio. A. ORTEGA / E. P.

timos datos de Red Eléctrica. Para hoy mismo, el coste de generación ha vuelto a situarse por encima de los 240 euros/MWh, un precio que no se veía desde mediados de enero.

Cuanto más subas el gas, más lo hará la factura de la luz, bien de forma directa a quienes tienen contratada la tarifa regulada (10 millones de hogares) o bien de forma indirecta a quienes tengan un contrato libre (unos 16 millones). La ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó ayer que está «garantizado» el suministro de energía, pero al mismo tiempo alertó del encarecimiento de los precios. Por ello, volvió a pedir a la UE herramientas «nue-

vas y poderosas» para hacer frente a esta escalada.

También se encuentra disparada la cotización del petróleo. El barril de Brent se encuentra sobre los 100 dólares, un 5% más que el cierre de este miércoles. Esta cotización sigue teniendo su repercusión en los surtidores, donde los precios no paran de subir.

Con el crudo a 100 dólares de forma constante, «la economía de la zona euro podría crecer un cuarto de punto menos este año», según explica el responsable de inversión de la banca UBS en España, Roberto Scholtes. «Serían unas cuatro décimas a España», indica. En cualquier caso, descarta una recesión económica.

**El ritmo de la recuperación española podría contraerse si el crudo se mantiene en el nivel actual**

El precio de la gasolina y del diésel ha conquistado esta semana nuevos récords históricos para ambos carburantes al encadenar su octava subida consecutiva. En el caso del diésel, acumula ya un encarecimiento del 9,8% en lo que va de año, mientras que en el de la gasolina es del 7,57%.

El precio medio del litro de gasolina se ha situado en los 1,591

euros, sumado así su cuarto récord histórico seguido tras encarecerse un 1,01% con respecto a la pasada semana, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,479 euros, remontando un 1,16% frente a hace siete días y estableciendo así su segundo máximo histórico consecutivo.

**Materias primas en tensión**

El conflicto del Este de Europa también está impactando en otras materias primas como el precio de los cereales, que están marcando récord este jueves. En el caso del trigo ha repuntado hasta su máximo de 344 euros por tonelada. La cotización del trigo y del maíz —Ucrania es el cuarto productor mundial— siguen escalando desde la apertura de los mercados. También el aluminio ha marcado récord, así como el paladio. En este sentido, los expertos recuerdan que Rusia juega un papel clave en buena parte de estos metales y otras materias primas, y que a los propios suministros mundiales.

Con todos estos elementos, los analistas anticipan ya un nuevo repunte de la inflación. La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ha elevado un punto su previsión para la inflación media española este año, hasta el 5,6%, por el conflicto bélico. También ha advertido de que si los precios observados actualmente se perpetúan, el Índice de Precios al Consumo (IPC) llegaría a situarse en el 6,5%, casi dos puntos más que en la estimación calculada antes de que comenzara esta guerra en el Este de Europa.



## ECONOMÍA

# El SMI, un 67% del sueldo medio

● Según Adecco, el salario medio en España se sitúa en 1.749 euros al mes a cierre de 2021 ● El Gobierno sigue prometiendo elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del sueldo medio, pero ya supone un 66,7%

**ALEJANDRA OLCESE MADRID**  
El Ejecutivo aprobó el pasado martes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros con efecto retroactivo desde el 1 de enero y reiteró su propósito de seguir aumentándolo hasta hacerlo coincidir con el 60% del sueldo medio en España, para así cumplir con la Carta Social Europea suscrita por España y también con uno de los objetivos del programa de Gobierno de la coalición.

La cuestión está en que, como ya constató el grupo de expertos que reunió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para asesorarle sobre la senda de subidas, la verdadera dificultad a la hora de decidir cuánto incrementar el SMI para

Pérdida. El poder adquisitivo del salario medio en España sigue estando un 6,9% por debajo del de 2009.

6,9

hacerlo coincidir con el 60% del salario medio está precisamente en determinar cuál es el salario medio en el país.

«El salario es uno de los determinantes económicos más importante, sin embargo, no hay una fuente óptima que permita estimar el salario medio, pues todas las fuentes disponibles adolecen de pros y contras», reconocían cuando presentaron su informe en junio del año 2021.

Para poder estimarlo tuvieron que partir de datos desactualizados del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2019, y elaborar un cálculo.

Según éste, elevar el SMI hasta el 60% del salario medio supondría incrementarlo hasta los 1.011 euros en 2023 –en caso de que el salario medio se mantuviera sin cambios–, hasta los 1.027 euros –si en 2020 hubiera subido un 0,9%– o hasta los 1.049 euros –si en 2020 hubiera subido el salario medio un 1,8%–. Todo ello sin contar con las posibles subidas o bajadas del salario medio que podrían tener lugar en 2021, 2022 y 2023.

«La Comisión ha constatado que la estimación del salario medio neto para 2020 supone un ejercicio complejo y sujeto a un grado excepcional de incertidumbre por las deficiencias identificadas en las fuentes disponibles y el impacto de la crisis de la COVID-19», admitían.

Aunque no se dispone todavía de un dato oficial del INE sobre la evolución del salario medio en el último año, la consultora de recursos humanos Adecco sí maneja ya una estimación.



Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. EUROPA PRESS

## UNA BRECHA TERRITORIAL DE 669 EUROS

Aunque el sueldo medio bruto se sitúa en 1.749 euros, existen importantes diferencias entre comunidades autónomas, según recoge Adecco, con una brecha que supera los 600 euros de diferencia.

La Comunidad de Madrid es la región con una nómina media más alta, de 2.071 euros al mes, seguida de País Vasco (2.047 euros), Comunidad Foral de Navarra (1.887) y Cataluña (1.868). Son las únicas cuatro comunidades con un registro superior a la media nacional.

En el lado opuesto se sitúan Canarias (con un salario medio de 1.402 euros),

Extremadura (1.418 euros), la Región de Murcia (1.541) y

Esto supone que en todas las comunidades en las que el salario medio se sitúa en cotas medias y bajas, el SMI ya supera el 60% de ese indicador. Concretamente esto sucede ya en todas las regiones salvo en Madrid y el País Vasco, donde un 60% del salario medio equivaldría a 1.242 euros y 1.228 euros respectivamente al mes (o 1.065 euros en catorce pagas en el caso de Madrid y 1.052 en País Vasco).

En Navarra, la siguiente con un sueldo medio más alto, el 60% equivaldría a 1.132 euros mensuales o 970,4 euros en catorce pagas. Con lo que aquí el SMI de 1.000 euros ya supera ese 60%.

En Canarias, por ejemplo, el 60% del salario medio equivaldría a 841,2 euros.

Según sus registros, presentados ayer, el salario medio en el país se situó en 1.749 euros al mes el año pasado, récord histórico para este indicador pero cuyo poder de compra se vio mermado significativamente por el zarpa de la inflación.

El poder de compra real del salario medio en España ha subido un 0,5% en 2021, con lo que sigue situando un 6,9% por debajo del mayor poder adquisitivo de la serie histórica que se alcanzó en 2009.

Si el salario medio asciende a 1.749 euros en doce pagas o 1.500 euros en catorce, el Salario Mínimo Interprofesional actual de 1.000 euros en catorce pagas o 1.166,66 euros mensuales equivale ya al 66,7% del salario medio, con lo que el Ejecutivo habría alcanzado ya su objetivo y no tendría que seguir aumentándolo.

La ministra, no obstante, defiende esta política de incrementos:

«España ha perdido peso en los salarios, en la renta nacional. Por lo tanto, el objetivo es ser más europeos, y sobre todo, destituir un modelo empresarial y de relaciones laborales, basado en la competencia en low cost, con bajos salarios, o relaciones laborales y empresariales absolutamente precarias».

«Ojalá fuese tan sencillo subir el salario medio como subir el salario mínimo», comentaba en Twitter el economista José Antonio Herce al conocer la intención de la ministra de subir el SMI a 1.000 euros. «Para lo segundo basta un Real Decreto Ley, para lo primero se necesita el conocimiento, la disciplina y la excelencia de toda la sociedad. A este paso, algún día, el salario mínimo igualará al salario medio. Aunque lo parezca, no es imposible, al menos desde el punto de vista de las matemáticas», decía en alusión a la creciente proporción que supone el SMI respecto al salario medio.